
1983: al principio del camino

Carlos Bazdresch P.

INTRODUCCIÓN

El escrito que sigue obedece a la intención de revisar brevemente lo ocurrido en el escenario macroeconómico de 1983 y sus consecuencias en los años posteriores. La hipótesis es que, a pesar de diversos errores, a partir del 83 hubo un cambio en la forma en que se tomaron las decisiones del gobierno en el mundo de la macroeconomía. Se trataba de la determinación de eliminar el excepcionalismo que practicaba la política económica, muchas veces guiada por el presidente, argumentando que México era diferente. Si bien el impacto de ese cambio no fue evidente sino hasta pasados varios años, los mejores resultados que se fueron obteniendo con el tiempo sí han ayudado a evitar la ocurrencia sistemática de crisis sexenales.

Aquí, revisaremos el proceso de ajuste económico iniciado ese año, y que continuó en diversas formas a lo largo de todo el sexenio de Miguel de La Madrid. Sin embargo, para establecer un punto de comparación, se inicia analizando, no tan brevemente como fuera deseable, las decisiones macroeconómicas que tomaron los presidentes Echeverría y López Portillo.

Como se verá, la mayoría de los planes de equilibrio que se tomaron en esos 18 años fracasaron. En el caso de Miguel de La Madrid también sucumbieron dos programas de estabilización¹. Planes truncados que, sin embargo, llevaron no a dejar el esfuerzo por la estabilidad, sino a realizar nuevos intentos que si bien no lograron plenamente los objetivos deseados,

¹ Excepto el plan que se implementó al final del sexenio, con el nombre de Pacto de Solidaridad Económica.

fueron generando un conjunto de avances, sobre todo en la tarea de modernizar a la economía y abrirla al comercio exterior. Por otra parte, al final del sexenio pudieron concretarse los diversos avances logrados, en el éxito del llamado Pacto, el cual, ciertamente, no fue un programa ortodoxo.

Los logros alcanzados con el Pacto generaron después confianza para avanzar de diversas formas en la modernización de la economía. De hecho, esto lo llevó a convertirse en la plataforma desde la cual se lanzaron las siguientes iniciativas de política económica. En particular, la de impulsar el proceso de apertura y modernización de la economía del país.

Es cierto, también, como persistentemente han señalado varios críticos, que esa apertura –realizada al estilo neoliberal– tuvo grandes costos sociales y económicos para diversos grupos sociales. Factura que después se ha convertido en un obstáculo para el proceso de modernización de la economía.

De esta manera, podría decirse que en 1983 comenzó un nuevo estilo de política económica, no sólo por su diseño, sino también por la manera de reaccionar a los fracasos que, eventualmente, tuvo que enfrentar. Destacamos aquí una cierta tozudez del gobierno de Miguel de La Madrid en perseguir la meta deseada aún después de repetidos debacles. De hecho, las políticas neoclásicas adoptadas a partir del 83, a pesar de su muy pobre éxito inicial, se mantuvieron vigentes, aunque modificadas, en los años siguientes, y jugaron un rol importante en el proceso de modernización de la política económica. Mientras, las políticas populistas de los dos sexenios anteriores desaparecieron.

Sin embargo, vale señalar que estas políticas, si bien fueron útiles para recuperar el equilibrio macro –al igual que sus antecesoras–, también tuvieron y siguen teniendo aspectos muy criticables. En general, el problema principal es no reconocer la necesidad de actuar para mejorar en forma persistente la distribución del ingreso. En particular, destaca la incapacidad de las políticas fiscales para subir los impuestos a las clases más altas.²

² Para llevar a cabo esta pequeña investigación me apoyaré, sobre todo, en el espléndido trabajo de investigación sobre lo ocurrido de 1983 en adelante, que hizo hace algunos años la Dra. Nora Lustig, y que apareció publicada en su libro *Mexico. The Remaking of an Economy*. Brookings Institution, 1998.

Tarde o temprano se tendrán que reconocer –muy al contrario de lo afirmado por los defensores a ultranza de la acumulación privada– los serios obstáculos para crecer que impone a la sociedad mexicana el hecho de que el Estado no tenga los fondos suficientes para promover un proceso de desarrollo moderno, y sin embargo, sí haya recursos para sostener la gran acumulación de ingresos que ha ido ocurriendo, desde hace ya más de medio siglo, a favor de las clases más altas de la sociedad mexicana.

LOS ANTECEDENTES

Antes de considerar la evolución de la economía de 1983 en adelante, es conveniente revisar en forma muy breve las políticas macroeconómicas adoptadas por las administraciones federales que precedieron a la que se inició en el 83. Tomaremos como punto de partida la década de los 60.

Los años sesenta

Los economistas tendemos a pensar que estos fueron años muy auspiciosos para el desarrollo económico del país por el hecho de que, en efecto, la economía logró mantener en promedio la tasa más alta de crecimiento que se haya registrado en la historia.

Es cierto que estos dos lustros fueron buenos desde el punto de vista económico. Para entonces, ya estuvo en operación la nueva elite profesional que había comenzado su escuela en los 40. Muchos de ellos habían estudiado en instituciones del gobierno. Había toda una nueva generación de artistas y profesionales. Las inversiones privadas extranjera y nacional mantuvieron un ritmo alto. Si bien se empezaban a vislumbrar problemas de difícil solución, fueron todavía años que, para la mayoría, ciertamente no muy reflexiva, resultaron optimistas.

No obstante, si las cosas se ven desde el punto de vista de la situación política del país, la lectura es contraria al resultado en el terreno económico. Así, como sabemos, poco antes del fin de esa década tuvo lugar el movimiento ferrocarrilero, apoyado, aunque en forma débil, por secciones importantes del sindicato petrolero y también por algunas del sindicato de maestros. Como se recordará, este movimiento fue aplastado en 1958, su núcleo ferro-

carrilero. Lo que tuvo todas las repercusiones que tiene ese tipo de represiones. De entonces acá, no se han repetido eventos de esa naturaleza.

Poco después, en 1960, vino en el reclamo y la advertencia de los empresarios privados al gobierno sobre sus posibles nexos con el poder cubano. Reclamo que costó casi un año de bajo crecimiento.

Después vinieron varios conflictos con grupos de estudiantes. Uno fue en el Politécnico. Otro en la Universidad de Morelia. No se trató de movimientos comunistas, pero sí de jóvenes de izquierda, y de miembros de partidos políticos y grupos de inclinación socialista. Posteriormente, tuvo lugar el conflicto de ISSSTE, que duró un buen tiempo, un movimiento de protesta de los médicos empleados contra la administración de esa institución. Básicamente fue de personal médico. La izquierda tuvo poco que ver en el asunto.

En 1968, se dio el movimiento estudiantil de la UNAM y el Politécnico. Ciertamente, el impacto de este suceso es difícil de exagerar. Y poco después aparecieron las guerrillas con sus secuelas de asesinatos y secuestros. Lograron su contención y posterior desaparición. Costó más de un sexenio, además de vidas e importantes fondos presupuestales.

De ahí en adelante, nunca se ha vuelto a presentar una década con un escenario político tan conflictivo.

El echeverriato

El presidente Luis Echeverría, desde el principio de su mandato, en diciembre de 1979, utilizó una retórica diferente de la usual para un gobernante del PRI.³ Por un lado, señalaba las carencias de los pobres e insistía en la necesidad de mejorar su suerte, ofreciendo empleo y educación. Por otro, en ese mismo discurso, solía incluir ataques a los empresarios, así como consideraciones sobre la necesidad de realizar un cambio social, de ayudar a campesinos y trabajadores. La derecha, con alguna razón, calificaba esta retórica de populista, sobre todo por

³ De hecho, el cambio de Echeverría tuvo lugar cuando hizo su campaña para la Presidencia de la República. Sólo que esta retórica populachera y agresiva se mantuvo por un buen tiempo después de iniciar su campaña.

su aparente intención de movilizar a la población de bajos ingresos a favor del gobierno. La izquierda reprobaba la retórica y desconfiaba de su propósito.

Desde luego, según este discurso, que a veces era un tanto incoherente, la ayuda a los desempleados tendría que venir de algún programa del gobierno federal. No se trataba de los posibles beneficios del desarrollo del mercado, o de enrolar a los empresarios en la tarea, o de pedirles dinero, sino más bien de que el gobierno se encargara de mejorar la suerte de la población de bajos ingresos mediante el diseño de nuevos programas de apoyo a campesinos y obreros.

En alguna medida, esta actitud se originaba en la necesidad de recuperar la legitimidad del propio gobierno como aliado de estos sectores. Atender esta carencia se hizo urgente por el conflicto del 68 entre el gobierno de Díaz Ordaz y los estudiantes, que se agudizó considerablemente tras la aparición de varias guerrillas urbanas y campesinas. Ambos movimientos, entre muchas otras cosas, protestaban contra el viraje a la derecha que habían realizado algunos gobiernos postrevolucionarios. Además, crearon un problema, sobre todo entre los jóvenes estudiantes, al negar la legitimidad del gobierno.

Con este discurso, Echeverría pretendía alejarse de la posición de Díaz Ordaz, y así acercarse con sus ofertas de ayuda a los trabajadores y gente de bajo nivel económico. También le interesaba el acercamiento con los intelectuales de izquierda. Algunos decían que la actitud crítica de Echeverría no era sincera. En mucho, con esa postura trataba de adelantarse a una posible rebelión de grupos de izquierda, en particular de líderes estudiantiles.

Desgraciadamente este discurso no fue muy exitoso. Sin embargo, no fue totalmente inocuo, pues molestaba a los empresarios. Obviamente, estos últimos lo rechazaron, pero también fue mal recibido por los estudiantes, quienes señalaban que el tinte izquierdista del discurso presidencial parecía un tanto falso.

Echeverría quedó en medio de ambos mundos, utilizando un lenguaje de izquierda pero manteniendo el poder en manos del PRI: sus miembros tenían ideas que se inclinaban a la diestra pero no las aplicaban. Se trataba de relegitimar al PRI, no de darle más voz a la izquierda.

Por otra parte, la rebelión que, en efecto, se estaba incubando en ciertos grupos de izquierda, acabó en la activación de diversos grupos de guerrilleros tanto urbanos como campesinos. El poder tuvo que responder a sangre y fuego. En esta tarea, el gobierno de Echeverría sí mostró gran eficacia. Sin embargo, es muy probable que el presidente quisiera evitar este baño de sangre, el cual llegó hasta los primeros meses del mandato de López Portillo.

En respuesta a la acción de la izquierda, o por otras razones, se iniciaron multitud de programas gubernamentales dirigidos a la ayuda de grupos de ciudadanos de bajos ingresos, y a fomentar la puesta en marcha de acciones distributivas relativamente novedosas. Un ejemplo, entre muchísimos otros, fue la donación de algunas tierras nacionales a grupos de campesinos, con el fin de que éstos las aprovecharan para hacer empresas turísticas.⁴ Por desgracia, muchos de estos programas contribuyeron a generar una seria indisciplina presupuestal que fue agravándose con el tiempo, y que con frecuencia resultó en que no fueran útiles.

Por este motivo, y en general por fallas de control del gobierno, el déficit fiscal pasó de un promedio de 2.5 por ciento del PIB en el periodo 56/72, a un promedio de 8 por ciento del PIB en el periodo 73/76.⁵ Dado que ya había señales de poca disciplina presupuestal, en algún momento del 72 se planteó, tanto por el Secretario de Hacienda como por el propio Echeverría, la idea de realizar una reforma fiscal.⁶

A fin de discutirlo se organizó, entre otros eventos, una reunión con la presencia del presidente Echeverría, del Secretario del Patrimonio, Horacio Flores de la Peña, y, desde luego, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en ese entonces al mando de Hugo Margain; también asistieron algunos miembros de la Dirección del Banco de México.

La propuesta hacendaria se parecía a la que había hecho Kaldor hacía ya varios años.⁷ Se proponía establecer un impuesto sobre la renta que acumulara todos los ingresos, el cual afectaría sobre todo a las percepcio-

⁴ Así, por ejemplo, en algún momento se donaron tierras cercanas a playas para que los campesinos pudieran establecer negocios turísticos.

⁵ Ver Lustig, tabla 1-4, p. 18.

⁶ Ver L. Solís: *Economic Policy Reform in Mexico*, p. 21 y pp. 67-77.

⁷ N. Kaldor: "Las reformas al sistema fiscal en México". *Comercio Exterior*, núm. 4, abril 1964, pp. 265-267.

nes altas. El punto principal era que, con la reforma, se llevaría a cabo la acumulación de los ingresos totales por cada contribuyente. En ese caso, los de mayor ingreso pagarían más impuestos debido a la progresividad “normal” de las tasas vigentes para el cobro del impuesto sobre la renta, y al hecho de que los ricos eran quienes tenían varias fuentes de ingreso, por lo cual eran los que más ganaban con la no acumulación de las diversas fuentes de ingreso.⁸

La iniciativa de reforma fiscal contenía otras ideas, pero la de mayor importancia fue la ya mencionada.

Es claro que la propuesta de reforma fiscal era razonable desde el punto de vista económico y de justicia social. Sin embargo, al presidente Echeverría no le pareció adecuado tener, en ese momento, una pugna con la poderosa iniciativa privada. En consecuencia, dejó en suspenso la reforma. En cambio, se propuso cambiar otras leyes a fin de promover la mexicanización de las empresas extranjeras.

Así, el tema de la reforma tributaria se dejó en paz. La consecuencia de esta decisión fue muy importante, pues, en cierta medida, la inflación posterior se originó en la necesidad de atender —de alguna manera— la urgencia por más gasto público.

En ausencia de un aumento efectivo en la recaudación fiscal, el cambio que realmente ocurrió, en ese sexenio, fue la adopción no declarada por el gobierno de un modelo de crecimiento con mayor gasto y, también, más déficit público. El cual, a su vez se financiaría, en parte importante, aumentando la deuda pública externa. Tanto el gasto como el déficit público, y la deuda gubernamental, en particular la externa, crecieron considerablemente durante el sexenio.

La pregunta que surge aquí es: ¿cuál fue el motivo por el cual Echeverría se decidió a no realizar una reforma fiscal? Aquí sólo cabe especular. Una posible razón, y quizás la más probable, es que no quería enfrentarse con un sector privado que iniciara fugas de capital o que actuara con un

⁸ Al principio del 76, ya con su mandato a punto de terminar, el presidente invitó a diversos directores de programas de inversión pública, para considerar, junto con ellos, las formas de disminuir el gasto público. Prácticamente las cosas no cambiaron. El déficit del gobierno federal siguió creciendo.

golpeteo más o menos continuo contra sus políticas. Quizá pensaba que en ese desgaste el gobierno era quien saldría más afectado.

Otro escenario es que alguien le haya aconsejado no enfrentarse a los empresarios y, simplemente, recurrir a la deuda externa para allegarse fondos. Pudo haber sido alguno de sus flamantes asesores. En todo caso, si alguien dio ese consejo, ese “alguien” estaba equivocado y llevó al presidente por un camino erróneo.

Pues, claramente, más allá del impacto que hubiera podido tener el gasto público financiado con prestamos del extranjero en la balanza de pagos, era lo mismo, desde el punto de vista de creación de demanda en un periodo dado, endeudarse que crear dinero. Aunque si se aumentaba la deuda externa, ya se tenía de antemano cómo pagar la excesiva demanda de dólares que se presentaría por el aumento del gasto público. En fin, el presidente Echeverría utilizó los recursos externos para financiar el gasto público y, desde luego, para solventar las fugas de capital.

Por lo anterior, no es de sorprenderse que la economía abandonara, de 1972 en adelante, el patrón de alto crecimiento con baja inflación. La economía pasó a un proceso de crecimiento en el que, si bien se estabilizó por un momento, el ritmo de la expansión de la economía real, la inflación, se volvió no sólo un componente habitual, sino que aumentó hasta convertirse en un problema grave.

Así, por ejemplo, mientras en el periodo 56-72, la tasa de crecimiento promedio fue de 6.7 por ciento, en el periodo 73-76 fue de 6.1 por ciento, pero la tasa anual promedio de inflación, que en el periodo 56-73 fue de 3.1 por ciento, en el periodo 73-76 tuvo un ritmo de aumento anual del 16.7 por ciento.⁹

En esas circunstancias, pronto hubo una evolución muy desfavorable en los intereses y en la capacidad de acción del gobierno, pues la inflación creció. Por ello se fue acumulando una creciente demanda de divisas –tanto por el mayor crecimiento de la economía como por los efectos de la sobrevaluación de la moneda nacional–. Entonces, apareció la posibilidad no muy lejana de una devaluación. El sector privado protestó

⁹ Lustig, tablas 1-4, p. 18.

todo lo que pudo y, desde luego, redujo la inversión productiva para ampliar la especulativa. Sin embargo, el presidente no le hizo caso. La devaluación realizada en esa forma resultaba muy costosa para el país, pues, ahora, había que pagar con divisas caras los pesos baratos con los que se había generado la necesidad de devaluar.

No sólo eso, sino que, al final del sexenio, desde el término de 1975, el sector privado, previendo que la devaluación se daría antes de que terminara el periodo presidencial, comenzó una fuga de capitales que concluyó precisamente con la devaluación realizada a finales de agosto de 1976. Las causas de la devaluación, fueron el aumento del gasto del gobierno, y la fuga de capitales que ocurrió principalmente entre el otoño de 1975 y los primeros ocho meses del 76.

En realidad, la salida del problema del financiamiento del desarrollo debió haber sido no la inflación, sino la realización de una reforma fiscal que aumentase de manera permanente las capacidades de inversión del Estado; pero, en esa ocasión tanto los privados como el presidente se negaron a darle luz verde. Esa negativa se repitió en el siguiente sexenio e incluso hoy se mantiene en pie.

Después de la devaluación ocurrieron otros incidentes conflictivos entre el gobierno y ciertos grupos de empresarios, de los cuales, el más notable fue la expropiación de más de 100 mil hectáreas de riego en Sonora.¹⁰ Obviamente, esto agravó las acusaciones de la derecha contra el presidente saliente. Triste final para el sexenio de Echeverría, quien, genuinamente, quería cambiar las cosas, pero no halló el camino.

José López Portillo

El presidente López Portillo empezó su sexenio con dificultades. Básicamente, por el mal final que tuvo su antecesor. Así, en razón de la devaluación del 76, la inflación había aumentado bastante. De hecho, se firmó una especie de acuerdo con el FMI para establecer un programa de tres años, durante los cuales el gobierno mexicano mantendría un nivel de gasto

¹⁰ Después de la represión contra estudiantes y guerrilleros, el presidente y la izquierda no tenían mucha relación entre sí.

determinado y el endeudamiento externo sólo podría aumentar en cierta magnitud; había, también, otros requisitos. El gobierno de México se comprometió a que en el primer año del sexenio, el gobierno no incrementaría su deuda externa en más de mil millones de dólares.

En los hechos, durante el primer año del sexenio, sí se guardó cierta restricción en cuanto al gasto público y el endeudamiento externo. A esa restricción se sumaban los costos del enfrentamiento entre Echeverría y el sector privado, y la desconfianza asociada. En consecuencia, en ese año la economía marchó con lentitud, el ingreso per-capita aumentó sólo 0.5 por ciento, mientras que los precios al consumidor subieron en promedio en 29.1 por ciento.

Sin embargo, cuando se dio a conocer que en México se había encontrado un yacimiento de petróleo de grandes dimensiones, la comunidad financiera internacional comenzó a ofrecer fondos al gobierno y éste los aceptó. Las cosas cambiaron con rapidez.

Además, en ese sexenio se estableció en forma un tanto cautelosa un principio de control de precios que se basaba en la idea de que manteniendo ciertos precios clave, como la tasa de interés, el salario, el tipo de cambio y el precio de algunas mercancías importantes, la inflación se podría controlar, puesto que su magnitud dependería de los “precios clave” y éstos, que sí se podían controlar, aumentarían más despacio que los otros y frenarían el aumento de los mismos.

Se creyó que con dicho manejo se detendría la inflación. Además, en este sexenio se cerró rotundamente la posibilidad de realizar una reforma fiscal. Por tanto, tampoco se quiso hacer un ajuste al tipo de cambio. En consecuencia, la demanda agregada aumentó rápidamente. La tasa de crecimiento de la economía también se elevó, llegando a niveles superiores a 8 por ciento, índices nunca antes vistos.

Asimismo, desde el segundo año de su sexenio, el presidente López Portillo –confiado en los ingresos petroleros futuros– comenzó a gastar en grande, ya fuera para apoyar el desarrollo del nuevo yacimiento de petróleo, impulsar la actividad nacional o cubrir serios rezagos de la inversión pública, como en el caso de la educación brindada por el Estado.

La mayoría de estos gastos fueron justificados. Sin embargo, el problema fue que no se financiaron con los ingresos provenientes de la venta

del petróleo. El aumento del gasto se generó con grandes cantidades de deuda pública, muchas de ellas financiadas a su vez desde el extranjero. Presuntamente, se pagaría con las ventas futuras del petróleo mexicano.

¿Cuál sería el precio de ese petróleo cuando se extrajera y vendiera? Obviamente, nadie sabía. Se suponía que sería el precio actual, es decir, el de 1977-78, pues, en el optimismo reinante, nadie especulaba que pudiese bajar. En realidad, la expansión del gasto público se financió con deuda externa: el gobierno de JLP se gastó los ingresos crecientes de la venta de petróleo, pero también utilizó cantidades de fondos mucho mayores, financiadas desde el exterior:

Se volvió a repetir el error del sexenio anterior: financiar el aumento del gasto público con deuda externa sin poder evaluar bien a qué costo se pagaría. Tanto el gobierno de Echeverría como el JLP emplearon algunos de esos fondos en propósitos tan importantes como la educación pública. Una vez más, si existían objetivos tan importantes como la formación del pueblo, ¿por qué no hacer una reforma fiscal?

Al igual que en el caso de Echeverría, no existe una respuesta clara. En esas circunstancias, se vale especular, pero la verdad es que de ahí tampoco proviene una respuesta satisfactoria. ¿Se trataba de la fuerza política de los ricos? No, porque en México ellos difícilmente van a poseer fuerza política propia. ¿Se trataba de la amenaza de la fuga de capitales? Aunque pudo hacerse tanto a Echeverría como a JLP, una fuga de capitales puede ser muy costosa para el hombre de negocios que la activa. Además, no es fácil implementar una fuga sin caer en grandes costos iniciales.

¿Para que sirvió el alto financiamiento público? Una respuesta simple es que, en el caso de JLP, sí se logró un auge. Así, como resultado del impulso del creciente gasto público, la tasa de crecimiento del PIB ascendió considerablemente, pasando de 4.25 por ciento en 1976 a 7.9 por ciento en 1981. Algo nunca antes visto. Sin embargo, como se mencionó, parte de ese gasto fue pagado con financiamiento externo. Así, en ese mismo 1981, la deuda externa del país llegó a 74.9 mil millones de dólares¹¹ y la inflación fue de 28.7 por ciento.

¹¹ Dada la confianza en el petróleo recién encontrado nadie se preocupó demasiado por el aumento de la deuda externa, Nora Lustig.

Al gobierno mexicano le parecía que la bonanza duraría por un buen tiempo; quizá por muchos años más. Por tanto, recurrió a financiamientos externos en grandes cantidades, llegando la deuda pública externa, en el quinto año de gobierno, a un monto de 59.7 mil millones de dólares y la deuda total a 92.4 mil millones de dólares. El monto de esta última era equivalente a 63.0 por ciento del PIB de 1981. Sin embargo, esto no parecía importante, pues con los precios del petróleo en aumento no habría ninguna dificultad en pagar esa nueva deuda extranjera. Como era de esperarse, también subió la inflación, la cual llegó a 27.9 por ciento en 1981.¹²

Por desgracia, en 1981, a sólo cuatro años de haberse iniciado el auge petrolero, el precio del crudo comenzó a descender, pues apareció una debilidad en el mercado mundial de dicho recurso. Fue una sorpresa desagradable: el gobierno mexicano esperaba que el precio subiera cada vez más, no que bajara. El problema se hizo evidente en 1981.

Para entonces el público conocedor ya estaba esperando una baja en el “oro negro”. En abril de 1981, finalmente PEMEX reconoció que, dada la evolución internacional del hidrocarburo, el precio del petróleo mexicano podía bajar y, de hecho, días después comenzó a hacerlo. De inmediato comenzó la fuga de capitales. Poco después, renunció el Director General de PEMEX.¹³

López Portillo pensó que el precio del petróleo volvería a subir, por eso siguió impulsando su producción y el resto de los proyectos en vías de realización. Tampoco aceptó la devaluación del peso, y dio órdenes de seguir con los planes de aumento del gasto público. También trató que el petróleo mexicano no bajara sus indicadores. Evidentemente tuvo que cambiar, pues PEMEX iba a quedarse sin ventas. Al mismo tiempo decidió que el peso no se devaluaría. En esas condiciones había que endeudarse en el exterior para sostener a la moneda nacional, aún frente a la fuga de capitales que ya estaba en marcha.

¹² Lustig, p. 22, tabla 1-5.

¹³ Se trataba del Ing. Jorge Díaz Serrano, quien, a fin de cuentas, se había encargado de promover la extracción del “nuevo” petróleo de PEMEX; después, hasta a la cárcel fue a dar. En su lugar quedó como administrador una persona competente, que no era del campo petrolero pero sí de la confianza del presidente.

Una de las causas de la disminución del precio del hidrocarburo fueron las medidas restrictivas de la inflación que comenzó a aplicar la administración del presidente Ronald Reagan al principio de su mandato, en los primeros años de la década de los 80. Al mismo tiempo, y por dicho motivo, la tasa de interés internacional comenzó a ascender, lo que aumentaba considerablemente el costo de la deuda externa anual para México.

Entonces el gobierno mexicano intentó reducir el aumento del gasto público. Sin embargo, para esas fechas el déficit público ya había llegado a 14.1 por ciento del PIB, una cifra altísima¹⁴. Como ya mencionamos, los precios al consumidor aumentaron 27.9 por ciento en 1981 y el déficit externo en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 16.1 billones de dólares, cifra 60 por ciento superior a la del año anterior.

Finalmente, se realizó la devaluación en febrero de 1982. Sin embargo, antes de que se pudiera estabilizar el peso, se anunció un aumento de salarios. La razón: se había decidido no enfrentar las demandas de incremento salarial obrero. El alza se efectuó en abril y su magnitud fue completamente desusada. El aumento acordado (del 10, 20 y 30 por ciento) fue acorde con el nivel de salario de cada quien. Así, las percepciones más bajas recibieron un incremento de 30 por ciento y el aumento se hacía menor conforme los salarios fueran más elevados. Claramente, subir los sueldos tuvo la justificación de que, sólo así, los obreros aceptarían la devaluación. Sin embargo, esta manera de hacer pasar la devaluación por los sindicatos implicaba una cancelación parcial de la misma.

Poco a poco, de abril a diciembre, todo se convirtió en caos. En el mercado cambiario hubo fugas de capitales de cada vez mayor envergadura. Para reducirla, el Banco de México instaló un sistema de cambios dual que permitía disminuir –al menos temporalmente– el impacto inflacionario de la devaluación. Por otra parte, la cotización de los mexdólares aumentó. A su vez, la SHCP trajo dólares en grandes cantidades. La fuga continuó creciendo y se prohibió al público realizar operaciones en dólares no autorizadas.

¹⁴ Lustig, p. 22, tabla 1-15.

En agosto, JLP quemó su último cartucho al nacionalizar la banca privada y decretar el control de cambios generalizado.¹⁵ Más tarde esto ocasionó grandes problemas. En particular porque, en los hechos, la banca mexicana jugaba un papel muy importante para impulsar la inversión privada. Sin su presencia muchas empresas y proyectos privados se quedaron sin el dueño que lo creó. No hubo mucha sorpresa cuando en los años siguientes se observó una clara renuencia de la inversión privada a comprometer más fondos.

Desde luego, hubo otros problemas, como la incapacidad del aparato productivo para mantener el nivel de ocupación y de la actividad económica en general. Las transacciones en dólares-pesos del último trimestre se realizaron, la gran mayoría, en un mercado ilegal, lo que no fue perseguido por la autoridad. Y hubo muchos otros efectos como resultado de una crisis de esa naturaleza.¹⁶

Una de estas consecuencias, y de no menor importancia, fue que los banqueros y otros empresarios, al ver el desorden en que había caído el gobierno, y sobre todo el rompimiento de un pacto implícito¹⁷ de no cambiar el régimen de propiedad de la banca, modificaron su opinión sobre las ventajas que les ofrecía el sistema corporativo de gobierno con el PRI y el presidente a la cabeza. De ahí en adelante, muchos dejaron de apoyar al partido oficial, y más aún, cambiaron su afiliación al PAN. Se fortaleció, así, la oposición al PRI y también al grupo heredero de los gobiernos posrevolucionarios.

Al final del 82, los precios al consumidor habían aumentado en el año 98.8 por ciento y la tasa anual de crecimiento del producto terminó en un -0.6 por ciento. Lo peor en muchos calendarios. Se terminó así el sexenio que llegó para abrigar las mejores promesas para el país, así como la esperanza de regresar al desarrollo estabilizador. En esa fecha, la deuda pública

¹⁵ Esta crisis fue una de las más severas que ha sufrido el sistema financiero mexicano.

¹⁶ Es importante notar que si bien la gestión económica realizada bajo la presidencia de López Portillo fue desastrosa, tuvo mejor actuación en otros campos. Aquí, podemos ejemplificar con la Reforma Política que aumentó considerablemente el rol de la oposición.

¹⁷ Hay evidencia que sugiere que este pacto implícito se había hecho desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas.

externa alcanzó un valor de 75.4 mil millones de dólares, y la deuda externa total del país fue de 101 mil millones de dólares.

El que esta última haya llegado a ese nivel fue, como ya hemos sugerido, en parte innecesario. Fue causada, principalmente, por errores, falta de comunicación y sobre todo el protagonismo del propio Presidente y de sus funcionarios allegados. Pero sin duda se debió también, y principalmente, a la indecisión de frente a una reforma fiscal efectiva. ¿Cuál fue el temor que detuvo tanto a Echeverría como a López Portillo para armar una verdadera reforma fiscal? No lo sé, pero sí es obvio que así todos se evitaban molestias y no perdían amigos.

Fue así, por motivos un tanto baladíes, que se pasó de un simple exceso de gasto, a una crisis de escasez extrema de dólares, lo cual frenó por largo tiempo el desarrollo económico del país. La fuga de capitales, y las diversas acciones de López Portillo dañaron las posibilidades de controlar la crisis. Posiblemente la profundidad de la debacle financiera de este sexenio hubiera sido mucho menor si desde el principio se hubiera aceptado la necesidad de devaluar, de aumentar los impuestos y de dimensionar mejor el gasto público.

LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 1983-1990

El primer programa de estabilización

Evidentemente, con la fuerte carga del endeudamiento externo adquirido en los últimos años del sexenio López Portillo, para el nuevo gobierno, que tomó posesión en diciembre de 1982, era inevitable recurrir al FMI. Esto, para asegurar el pago de la deuda de los próximos meses y años, estabilizar el valor del peso y renovar, cuando se pudiera, la marcha del crecimiento económico.

Así, ya con Miguel de la Madrid como presidente, se anuncia el inicio del programa de estabilización, acordado entre el gobierno mexicano y el FMI. El programa tenía el ambicioso nombre de Programa Inmediato Para la Reordenación Económica (PIRE).¹⁸

¹⁸ PIRE quería decir Programa Inmediato de Reordenación Económica.

Vale notar que en el caso del gobierno de De La Madrid hubo un tanto más de seriedad al enfrentar el problema. En realidad, echar a andar la economía otra vez y recuperar, hasta donde fuera posible, lo que ya se tenía, era una tarea muy difícil. De hecho, el país no se salvó de retroceder. Sin embargo, todos los operadores de ese momento fueron muy realistas. Se trataba, incluyendo al presidente, de una generación más joven, y los problemas eran más agudos. Quizás eso ayudó a tomar una actitud más realista. Obviamente, volver a la senda del crecimiento iba a implicar un gran sacrificio para los mexicanos pobres, tanto en empleo, como en oportunidades de progresar.

La esencia del programa consistió en implementar con rapidez las siguientes acciones: 1) una severa reducción del gasto público, y 2) una fuerte devaluación del peso que detuviera la salida de capitales, hiciera más rentable la actividad exportadora y generara un aumento sustancial de la reserva de divisas extranjeras. Teniendo esto, ya se podía elevar la tasa de crecimiento de la economía.

En ese momento se pensaba que un fuerte *shock treatment* bastaría para que se detuviera la inestabilidad del peso, y la economía regresara al equilibrio macroeconómico, en particular al de la balanza de pagos, y en un rango relativamente bajo de inflación. Era claro, desde el principio, que los salarios reales bajarían.

Para el primer año los objetivos del plan, eran obtener en 1983 primero una caída de la tasa de inflación de los precios al consumidor, a fin de que esta tasa se disminuyera a un ritmo de 55 por ciento anual, y después una nueva reducción de la inflación, pero ya con la economía creciendo. La tasa de crecimiento prevista para 1983 fue de cero por ciento.

En los hechos, en los primeros doce meses se logró bajar la inflación sólo al 80.8 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento de ese año no fue, como estaba previsto, de crecimiento nulo, sino de -4.2 por ciento. Los salarios reales bajaron 24.9 por ciento.

Por otra parte, el programa previó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de -2.2 por ciento del PIB. En la realidad, se obtuvo un superávit en la cuenta corriente de 3.6 por ciento del PIB, equivalente a 5.4 mil millones de dólares. Este último resultado resultó interesante, ya que de esta manera se reducía el problema de balanza de pagos; pero esa caída

se debió, principalmente, a la disminución del volumen de la producción. Disminución que no se había previsto en el programa. Evidentemente, esa no era una forma adecuada para reducir el déficit de balanza de pagos. Ni podía esperarse que se repitiera, sobre todo si se deseaba que en 1984 el ritmo de la actividad económica aumentase.

En 1984, tuvo lugar una breve recuperación de la actividad económica, la cual, en parte, se debió a que el gobierno tuvo un déficit mayor de lo previsto. Así, mientras, al principio se había planeado tener un déficit público en 1984 del 5.5 por ciento, ya, en la realidad, fue del 8 por ciento. Además hubo una breve reevaluación del peso. Esto causó, además de la recuperación mencionada, un déficit mayor al previsto en la balanza de pagos, y un crecimiento más rápido que el esperado. Por su parte, el FMI señaló incumplimiento por el mayor déficit público del 84.

La evolución anterior provocó el fracaso del programa. Así, se preveía que en el 85 el crecimiento recuperara su nivel del 6 por ciento, con una inflación del 18 por ciento. Sin embargo, en la realidad, el crecimiento fue de 2.6 por ciento, pero con una inflación del 63.7 por ciento y, peor aún, a la mitad de 1985 hubo una crisis de balanza de pagos provocada, en parte, por las fugas de capital. Además, dado el “incumplimiento”, el FMI no otorgó todo el financiamiento programado y el programa se suspendió.

La reacción del gobierno podría haber sido señalar que el programa de ajuste planeado con el FMI había sido un tanto irreal. O bien, que ese tipo de medidas no funcionaban. En la realidad no hubo tal discusión. El gobierno tuvo que absorber el costo total del ajuste. Sólo que, ahora, no se restauró la estabilidad de precios, ni hubo crecimiento. Además, en 1985 hubo otra crisis de balanza de pagos.¹⁹

La reacción de la economía no se hizo esperar: el déficit externo volvió a crecer, y la inflación a aumentar. Una explicación fue que para arreglar el desbalance en la cuenta de pagos al extranjero, era necesaria una liberalización de las reglas de comercio exterior, al igual que, para hacer permanente una reducción del déficit fiscal, era conveniente llevar a cabo un programa de privatización.

¹⁹ Lustig, pp. 37 y 38.

Además, se señaló que para hacer un ajuste ordenado hubiera sido necesario un mayor financiamiento externo. En fin, por la razón que sea, el primer programa de ajuste, acordado con el FMI, fracasó al segundo año de su inicio.

Dicho de otro modo: cuando, en 1976-1977, no se hizo un esfuerzo efectivo por parar la inflación, falló la idea de que se detendría cuando la economía recuperara su crecimiento rápido y la oferta agregada se expandiera. Por tanto, la economía entró en crisis. Sin embargo, tres años después, los que habían querido detener la inflación con el programa de estabilización encontraban que también sus recetas fallaban, pues no fue suficiente la disminución de la demanda para que la inflación se redujera en forma sustantiva.²⁰

El evidente fracaso del PIRE, devino en una crisis de confianza entre el público, lo que, a su vez, incitó más fugas de capital, y una nueva crisis de balanza de pagos en 1985. Esto, a su vez, condujo a una falta de cumplimiento de las metas fijadas en el programa firmado con el FMI, y en consecuencia a la suspensión de los préstamos de esta institución.

Se puede discutir mucho la razón precisa de este intento fallido, pero no es el objeto de este apunte pasar por esa discusión.²¹ Aparentemente, una de las causas centrales fue el relajamiento de la meta del déficit fiscal para 1984 (se brincó de un déficit programado de 5.5 por ciento del PIB a uno de 8 por ciento también del PIB.) También hubo falta de apoyo de crédito externo para mantener las medidas restrictivas y no se quiso frenar el aumento de los precios clave.

Tras el primer programa de estabilización

Después de ese fracaso, que tomó los tres primeros años del tiempo presidencial de De la Madrid, el gobierno impuso nuevas medidas restrictivas tanto de política fiscal como monetaria.

²⁰ Lustig, pp. 34-38.

²¹ Guillermo Ortíz: "Mexico Beyond the debt crisis" en Michael Bruno (ed.) *Lessons of Economic Stabilization and its Aftermath*. MIT press 1991. Ambos citados por Lustig.

Además, ya entrado el 85, se empezó, aunque en forma un tanto forzada, la toma de medidas estructurales. Así, se aceleró la liberalización de las importaciones comerciales, de tal manera que la proporción de las importaciones libres del requisito de permiso previo, pasó del 16.4 por ciento en diciembre del 84 al 64.1 por ciento en julio del 85. Esta última medida se compensó, sólo parcialmente, con un aumento de los aranceles, cuyo promedio ponderado pasó del 23.5 por ciento en junio del 85 al 28.5 por ciento en diciembre de ese mismo año.

Si bien esta liberalización parecía haberse tornado como una medida de emergencia, en realidad fue muy importante, pues implicaba que la solución general del problema de balanza de pagos se buscaría ya no con mas aranceles y sustitución de importaciones, sino con una mayor capacidad para competir. Se trataba, ahora, en forma muy concreta, de quitar restricciones al mercado.

Un problema adicional se presentó en 1986 por la caída de los precios del petróleo, que bajó de un precio promedio de 25.5 dólares en 1985 a 12 dólares por barril en 1986. Esto implicó una reducción importante tanto del ingreso de dólares, como de ingresos fiscales. La pérdida de divisas por la caída del precio del petróleo fue de 8.5 mil millones de dólares, el equivalente a 6.7 por ciento del PIB, 48 por ciento del valor total de las exportaciones, y 26.2 por ciento de los ingresos del sector público. Desde luego, esto también implicaba una disminución de los salarios reales, los cuáles cayeron entre 6 y 11 por ciento.

La depreciación del peso controlado aumentó, y por tanto también la inflación. Esta última pasó de 63.7 por ciento en 1985 a 105.7 por ciento en 1986. Sin embargo, aún con ese aceleramiento, la inflación se mantuvo por debajo del nivel de la devaluación nominal.

Fue sorprendente la ausencia de protestas, o de reacciones efectivas en el mundo de la política, o el sindical, a cambios de esta naturaleza, que sin duda afectaron muy negativamente el nivel de vida del grueso de la población. Quizás aquí estuvo el punto mas difícil de este episodio.

¿Por qué no hubo una reacción mas amplia del público mexicano? En parte porque el gobierno tenía, todavía, un gran control de los sindicatos y de las organizaciones campesinas. Además, en ese entonces los partidos de oposición eran muy pequeños. La reforma política apenas

estaba comenzando. En otra parte, porque el PRI tampoco se movilizó, ya que su juego dentro del “sistema” era apoyar al gobierno. También, quizá, porque ya había habido un gran desgaste con los intentos de “arreglar” los costos, y en el caso del gobierno del presidente De La Madrid ya se actuó con más realismo.

Por la razón que sea, en el 86 el dólar se pudo sobrevalorar durante un tiempo, lo que estimuló considerablemente las exportaciones no petroleras. Así, la proporción de las exportaciones petroleras en el total de las exportaciones del país pasó de ser en 1985, el 68.2 por ciento del total del ingreso por exportaciones, a constituir sólo el 39.3 por ciento de dicho ingreso en 1986. Esto ocurrió, en parte, por la muy rápida alza que tuvieron las exportaciones no petroleras, que en ese año (1986) fue del 22.9 por ciento, pero también por la caída del precio del petróleo, la cual llegó a poco más del 50.0 por ciento.²²

Sin embargo, es claro que no era posible seguir promoviendo la exportación subvaluando el peso, ya que esto, en un plazo no muy largo, generaría un proceso inflacionario rápido. México necesitaba un mayor financiamiento en moneda extranjera, ya sea por nuevos préstamos, y/o por una reconversión de los préstamos ya concedidos. Esto llevó a una nueva estrategia de estabilización. Esta fue la primera que tuvo un éxito importante.

El Plan Baker

En las pobres circunstancias en que se encontraba la economía mexicana era necesario, sobre todo, regresar a un tipo de cambio estable, lo que hacía casi inevitable la obtención de financiamiento externo. En consecuencia, México amenazó a sus acreedores con declarar en forma unilateral una moratoria.²³ Ante esa alternativa, la banca comercial acreedora de México aceptó entrar al Plan Baker, que proponía un cambio de énfasis de los países acreedores hacia el apoyo a los países deudores para

²² El precio del petróleo bajó más del 50 por ciento.

²³ Lustig no lo menciona pero es muy probable que esta amenaza llevaba el “nihil obstat” del gobierno norteamericano.

que recuperaran su crecimiento.²⁴ Esta acción tuvo como resultado, por fin, una amplia reestructuración de la deuda externa del país.

Así, hacia el final del 86, México recibió:

- a) Un préstamo de dinero fresco por 6 mil millones de dólares.
- b) Se elaboró un nuevo plan de pagos para solventar la deuda antigua; según este plan, el pago del 83 por ciento de los 52.2 mil millones de dólares por pagar se reprogramó a un periodo de 20 años, más 7 años de gracia.
- c) La prima sobre el libro se redujo de 1.12 por ciento a 0.8125 por ciento.
- d) El pago de la deuda no bancaria también se reprogramó, así el pago de 9.7 mil millones de dólares se reconvirtió para realizarse en un periodo de 20 años más 7 de gracia.
- e) Se pusieron a disposición de México diversas posibilidades de préstamo del gobierno de los Estados Unidos.

De esta manera, el conjunto de los fondos privados y públicos que México recibió, además del mayor plazo en distintos préstamos, llegó a casi 12 mil millones de dólares. Los nuevos préstamos, acompañados de mejores precios del petróleo y de más exportaciones no petroleras, resultaron en la acumulación de una reserva de fondos internacionales de 13.2 mil millones de dólares. Cantidad de una magnitud nunca antes vista.

Sin embargo había un pelo en la sopa. La acumulación de reservas se había logrado, en parte, por la devaluación de la moneda, lo cual aceleraba la inflación. Había que cambiar la receta, aprovechar la acumulación de reservas, y el aumento en la rentabilidad de las actividades de exportación asociado a la previa devaluación y a la reducción del monto real del salario, así como la disminución de las importaciones producto del alto costo del dólar.

Obviamente, eso no podía lograrse únicamente a base de devaluaciones continuas. De hecho, ya estaba comenzando a ocurrir un proceso de indización de los precios al nivel del tipo de cambio. Por tanto, había que diseñar, e implementar, una política diferente que fuera eficaz como acción anti-inflacionaria. Era hora de cambiar el foco de la política macroeconómica mexicana hacia la estabilización.

²⁴ Lustig, p. 237.

De hecho, en ese año México obtuvo un préstamo adicional por más de 2 mil millones de dólares, así como un superávit en la balanza de pagos de 4 mil millones de dólares. Además, se logró un superávit fiscal que aumentó de ser 1.6 por ciento del PIB en 1986, a un monto equivalente al 4.2 por ciento del PIB en 1987. Sin embargo, después de dos intentos de programación multianual, y mas de cinco años de programas de ajuste, la inflación se mantenía alta: entre 7 y 8 por ciento al mes. Evidentemente había que actuar, pues de no hacerlo, casi de seguro se volvería a caer en una inflación mucho más rápida. Sin duda era necesario ser tozudo, y De La Madrid lo fue.

El Pacto

Para lograr la estabilidad –con crecimiento– de la economía del país, se abrió un nuevo capítulo: el del Pacto de la Solidaridad Económica. En realidad, en esta etapa, definida más de siete años después del inicio del programa anti-inflacionario, se estableció un programa de estabilización distinto a los anteriores. Vale notar que esta nueva etapa significaba, hasta cierto punto, un rompimiento con la “ortodoxia” del FMI y Banco Mundial.

Lo peculiar de este plan fue que, si bien se mantuvo el propósito básico de controlar el monto y distribución de la demanda agregada –a través de: a) reducir el déficit fiscal, b) sostener una política monetaria restringida, y c) impulsar la liberalización comercial–, también se incluyó una política de ingresos. Esta última, en la práctica, ponía bajo su control a todos los precios y salarios. Es claro que así el plan de acción era muy diferente de los programas del FMI, los cuales, más bien, se basan en el control de la demanda agregada.

En la práctica, la idea de que el compromiso por la estabilidad obligaba tanto al gobierno, como, en forma concreta, a cada empresario, igual que a cada sindicato, y en teoría a todo obrero, hizo que las cosas funcionaran de manera diferente. En esa idea de que había un compromiso, que quizá podía considerarse solidario, tanto del lado de los empresarios como de los obreros, de actuar para reducir la inflación y compartir la carga de hacerlo, la propuesta fue:

Pedirles a los empresarios disidentes que ajustasen su conducta a la de los demás, cuyos aumentos de precios se habían mantenido dentro de la recomendación de la SHCP. Si, en caso contrario, las quejas se repetían, en-

tonces la autoridad podía actuar poniendo multas y/o demandando explicaciones. En segundo lugar, la empresa cuya conducta se detectaba como no conforme a los lineamientos, podía esperar, a lo menos, dificultades en sus trámites, retraso en la atención de sus demandas y reconvenciones por parte de la autoridad, entre otras medidas.

Quizá por su novedad, el pacto produjo de inmediato buenos resultados. El segundo semestre, la inflación mensual promedio fue de sólo 1.2 por ciento, comparado con el 9 por ciento mensual en el segundo semestre de 1987. Aunque no se tienen estadísticas para juzgar la adecuación de la conducta de diversas empresas, la realidad fue que, al final, los precios habían subido a un ritmo de 1.5 por ciento mensual, o sea, a una velocidad muy inferior a la de antes.

De alguna manera, el énfasis para lograr una cooperación de las empresas para bajar la inflación había sido exitoso. También es cierto que el gobierno adoptó una actitud vigilante para empujar a obreros y empresarios a actuar de acuerdo con la necesidad de reducir la inflación.

La acción del pacto puede dividirse en: a) condiciones iniciales, y b) las características de su implementación:

La primera se refería a que: a) el déficit fiscal estaba bajo control, b) las cuentas externas eran muy positivas; se había acumulado reservas por 16 mil millones de dólares, y c) los precios relativos se habían realineado antes de que se aplicara la congelación de precios y salarios.

La forma de operar el pacto introdujo varias novedades. Hubo una dosis importante de acciones ortodoxas, tales como: a) cortes al déficit fiscal y disminución del crédito a las empresas, y b) la forma de implementar las diversas decisiones, en particular la congelación de precios, las cuales se hacían con el apoyo de los miembros del pacto.

Con personal de este nivel se estableció una comisión formada por empresarios importantes, líderes de los principales sindicatos y funcionarios de alto nivel. Esta comisión se reunió semanalmente para monitorear el avance y resolver en conjunto las acciones que correspondieran. Su existencia y operación fue importante para ganar credibilidad.

Así, el pacto fue efectivo para reducir en forma apreciable la inflación. Esto, a su vez, hizo posible regresar a un cierto equilibrio la balanza de pagos, ya que con inflación reducida ya no era tan rentable sacar dinero del

país, y los pagos por los intereses de la deuda eran más financiados internamente. Sin embargo, aun así faltaba lograr el crecimiento rápido, el cual no se había podido concretar desde hacía muchos años.

En primer lugar estaba el hecho de que el sector privado generaba, año tras año, un déficit importante en la balanza de pagos, en promedio en el sexenio 83-88, de 5.9 por ciento del PIB. En total, más de 15 mil millones de dólares en términos reales. Desde luego, a eso no podía agregarse un déficit público, intentando promover un crecimiento impulsado por el gasto público. Tampoco era posible elevar la tasa de interés, ya que eso tendría un fuerte impacto fiscal. Era claro, entonces, que se requería que el sector privado volviera a invertir con entusiasmo. Para eso era necesario crear oportunidades de inversión.

Por lo tanto, era urgente disminuir la carga de la deuda. Para lograrlo se llegó a un acuerdo con el gobierno americano, el Plan Baker, cuya acción iría más allá que otorgar la ayuda a México. Su firma se realizó en marzo de 1989. El efecto directo fue un aumento de disponibilidades de alrededor de 1 millón de dólares. Pero, además, se esperaba que traería más confianza en los inversionistas extranjeros y que habría un flujo de capitales adicional hacia México.

De alguna manera se requería, ahora, una acción de la iniciativa privada y más capital extranjero. Sin duda, Salinas de Gortari, en ese entonces ya presidente, sabía que era lograr que la máquina de la inversión privada, nacional y extranjera, volviera a caminar con rapidez. Entonces apareció, en mayo del 90, la cuestión de la reprivatización de la banca. Esta acción tuvo de inmediato una reacción favorable: hubo un reflujo importante de capitales y la tasa de los Cetes cayó 14 puntos, bajando a 32.4 por ciento. Este evento constituyó una indudable señal de mayor confianza de parte del sector privado. Siguió el flujo de capitales privados: se estima que en 1990 fue de 15 mil millones de dólares, entre enero y septiembre de ese año. Las tasas de interés siguieron bajando, lo que ponía en evidencia un retorno de la confianza del inversionista. Para 1991 se estima que hubo un retorno de capitales de más 10 mil millones de dólares.

Así, en 1991 aparentemente ya se había recuperado la capacidad para crecer. La inflación fue del 18.8 por ciento y la tasa de crecimiento de 3.8 por ciento. Ahora, para hacer sostenible la recuperación, faltaba mantener

bajo control la tasa de inflación y la balanza comercial. Desde luego habría problemas, pero la situación en principio era viable si se mantenía: I) una posición fiscal sólida. II) una inflación baja, III) reservas internacionales crecientes, y IV) bajas tasas de interés internas.

Como sabemos, el buen augurio para la recuperación del ritmo del crecimiento se cumplió sólo a medias en lo que restaba de la administración de Salinas de Gortari. Pues ésta, por desgracia, terminó mal por el asesinato de Colosio, la crisis de fuga de capitales que eso produjo y los diversos desacuerdos sobre el manejo de esa crisis. Pero esa ya es otra historia. ❧